

La situación política uruguaya

Danilo TRELLES, corresponsal

Sin duda, el acontecimiento político más importante registrado en el Uruguay en los últimos tiempos ha sido la realización del primer congreso nacional del Frente Amplio, no sólo porque ha permitido analizar el cuadro de la situación desde el punto de vista crítico, equilibrado y sensato, sino porque ha permitido revisar cuáles son los problemas que están impidiendo que la izquierda alcance el grado de madurez y desarrollo que le permitan asumir un papel decisivo en el proceso de cambios que el país necesita para superar la etapa de transición; hacia un estado socialmente democrático.

Los puntos esenciales de la discusión de la izquierda reposan curiosamente en una especie de axioma: el frente aspira a crecer, para algunos recogiendo fuerzas dispersas de los partidos tradicionales a través de acuerdos de cúpulas que se han manifestado descontentas con las direcciones nacionales de sus partidos. Este es el caso, por ejemplo, de MNL (Tupamaros) que han tratado de formular acuerdos con algunas corrientes del Partido Blanco (Movimiento de Rocha y Unión Blanca Popular), del PGD (Partido por el Gobierno del Pueblo) que lidera el senador Hugo Batalla, cuyos esfuerzos se concentran en nuclear fuerzas para una reforma constitucional y del PDC (Partido Demócrata Cristiano) que comparte en líneas generales la idea de ampliar el frente, sin definir ninguna fórmula y que curiosamente se opone al ingreso del MNL en la coalición de izquierdas.

Esta idea genérica de ampliación del Frente Amplio es compartida por todos los sectores del movimiento, aunque no se comparten los métodos que han seguido aquellos grupos y el riesgo de división que implican algunas de las gestiones iniciadas. El desarrollo de las fuerzas del frente debe provenir de la consolidación primero del propio movimiento, fortificando su estructura interna y unificando criterios dentro de la compleja coalición de fuerzas que lo fundaron. Lo contrario — como ha venido ocurriendo — puede crear la ilusión de que se ha logrado un frente grande — como quiere el MNL — aunque en realidad lo único que obtengan sea una simple coalición electoral, sin perspectivas programáticas, como lo demuestra la rotunda negativa del Movimiento de Rocha (Partido Blanco) de aceptar ninguna especie de alianza con ellos.

Los conflictos latentes por las discrepancias que suscitan en la izquierda el planteamiento de estos problemas, vinieron a caldearse por dos incidentes de importancia relativa, pero que son reveladores de cosas más profundas. El más importante fue la posición asumida por uno de los partidos del Frente Amplio, el PGP ante el nombramiento como ministro de Defensa del teniente general Hugo Medina, actual jefe de las Fuerzas Armadas y figura de capital importancia en el proceso que culminó con los acuerdos del Club Naval para la entrega del poder a los civiles.

El líder de ese grupo, senador Hugo Batalla, abriendo en cierto modo la carta de crédito al nuevo ministro, planteó una situación de conflicto con el resto de los sectores del frente para quienes ninguno de los mandos militares que participaron en el proceso de represión pueden ser excluidos del juicio que merecen, por lo que la medida del gobierno viene de alguna manera a rehabilitar a una de sus figuras más importantes.

El otro incidente que ha caldeado los ánimos ha sido la actitud asumida por el MLN a través de un editorial de su órgano oficioso "Mate Amargo", en el que luego de enjuiciar la actitud del frente en el pacto del Club Naval, arremete contra una posición de éste que inhabilita su ampliación y postula por la posibilidad de "un frente popular que junte, con chance cierta, al país de alternativa".

En las entrelíneas está presente el problema del repetido rechazo del ingreso del MNL al Frente Amplio, rechazo que como se sabe está basado en el veto interpuesto por los democristianos (PDC) que, de no respetarse, podría provocar la ruptura de la coalición de izquierdas.

Ese problema, aún no resuelto, constituye el talón de Aquiles de toda la estructura del frente ya que, aunque todos los partidos que lo integran aceptan la actitud del MNL proclamando su decisión de reintegrarse a la lucha política en el plano de respeto a los principios constitucionales, la oposición del PDC los enfrenta a tomar una decisión que puede precipitar la crisis. No favorece por otra parte, la solución del problema, la actitud asumida por el sector radical del MNL, proclamando estrategias políticas al margen de las que la izquierda uruguaya ha asumido en el congreso, es decir, la decisión de asumir pero a partir de las estructuras

que ya existen y defendiendo consecuentemente una política de alianzas basadas en los principios que ha defendido el frente hasta ahora.

Pese a que el congreso no ha terminado de aclarar todos estos entredichos, no pueden negarse los aspectos positivos que la realización del mismo ha permitido, fundamentalmente la voluntad política de reafirmar la unidad del movimiento y la clarificación del proyecto frenteamplista para enfrentar el programa conservador del Gobierno, inclinado cada día con mayor empeño, a entregar los intereses del país, de acuerdo con las directivas del FMI, a las multinacionales y el capital extranjero.

La política económica del gobierno se ha mantenido incambiada. El país sigue sin tener programas concretos de reactivación y el ámbito financiero continúa siendo el centro de la economía. Más de la mitad de la riqueza que produce el país (unos 2 mil 700 millones de dólares anuales) se hallan depositados en los bancos. La estructura del gasto público privilegia el pago de la deuda, en desmedro de las inversiones con contenido social y reactivante. La última refinanciación presenta como única novedad destacable la rebaja de medio punto en la tasa de interés, pero el Gobierno sigue defendiendo la negociación individual.

El crecimiento productivo reciente, que obedeció a factores coyunturales externos (tasa de interés, reducción del precio del petróleo y exportaciones extraordinarias al Brasil) ha vuelto a estancarse provocando un recrudescimiento de los problemas endémicos de esta economía. La evolución salarial se ha frenado y el desempleo ha vuelto a incrementarse. Las condiciones de la salud, educación y vivienda no sólo muestran síntomas de mejoramiento, sino que ni siquiera fueron mínimamente contemplados en el reciente presupuesto general de gastos.

Los centros del programa del Gobierno se concentran en algunos puntos esenciales que dan la pauta de cuáles son las orientaciones del proyecto conservador.

1) La capitalización de la deuda externa persigue la entrega incontrolada de los recursos nacionales a precios de liquidación en pago de la deuda. Las operaciones serán encaminadas a través de los bancos de inversión concentrados en torno al Citibank que es el principal acreedor.

2) La creación de zonas francas que transformará al país en una especie de coto privado del capital extranjero con grave riesgo de deterioro de la ya debilitada industria nacional.

3) La liquidación de la presencia del Estado en importantes sectores estratégicos como por ejemplo la pesca, los transportes y las comunicaciones, que han sido tradicionalmente campos de responsabilidad del gobierno y que se entregaría al capital extranjero con grave lesión de los principios de soberanía.

Ante este lamentable cuadro, el Frente Amplio reiteró en el congreso su voluntad de luchar por un cambio radical de la situación a través de medidas concretas en áreas esenciales, sobre todo en el campo productivo planteando medidas de control sobre el comportamiento del sistema financiero y reestructurando el gasto público, jerarquizando los destinos sociales y que faciliten la reactivación económica.

Sin duda, el futuro inmediato del proceso político uruguayo reposa ahora en la posibilidad de que el referéndum sobre la ley de caducidad de los delitos militares durante la dictadura, suponga un rompimiento de las estrategias con que se manejan hasta ahora los partidos tradicionales, empeñados, como siempre, en una dura batalla por la conquista del poder en las próximas elecciones de 1989.

No hay por ahora entre ellos ninguna preocupación por programas de gobierno, ni polémica en torno a los graves problemas que dominan el panorama político uruguayo, sino una abierta y enconada lucha acerca de quienes serán los que obtengan la nominación para los cargos representativos a partir desde el presidente. La ley de lemas que permite la acumulación de votos de distintas tendencias, permitirá que se consagre una vez más el absurdo sistema que ha permitido hasta ahora el dominio de los partidos tradicionales.

La única alternativa a esta situación podría darla el referéndum. Si este llega a realizarse y lo gana la oposición democrática, decidiendo la derogación de la ley de caducidad, podría comenzar a operarse un cambio radical en la situación del país. Sin duda la perspectiva es difícil, pero la oposición no ha perdido la esperanza. Las 650 mil firmas que solicitan la apertura del proceso contra los militares son un buen testimonio de que una buena parte del país desea cambiar las cosas.